**Fundamentación de la causa disolutoria por paralización de
los órganos sociales en las sociedades de capital**

Rationale of corporate deadlock as ground for dissolution

Pablo Sanz Bayón

Universidad Pontificia Comillas

Trabajo publicado en la obra colectiva: Valencia Saiz, A. (Coord.), *Investigaciones en ciencias jurídicas: desafíos actuales del Derecho*, Universidad de Málaga, 2014, págs. 549-557. ISBN: 978-84-16036-51-6.

Resumen

El presente trabajo contiene un análisis jurídico sobre la fundamentación básica de la causa legal de disolución de las sociedades de capital por paralización de sus órganos sociales (recogida en el actual art. 363.1 d de la Ley de Sociedades de Capital de 2010), por medio de una revisión sintética de sus antecedentes normativos y examen crítico de la evolución seguida por la legislación y jurisprudencia españolas en su reconocimiento y aplicación. El objetivo de dicha investigación es evaluar específicamente el tratamiento solutivo que la vigente regulación societaria ofrece para las situaciones de bloqueo de los órganos sociales, en el marco del régimen normativo general de la disolución, con especial atención a su acaecimiento en sociedades cerradas.

Palabras clave: sociedad de capital, derecho societario, paralización de los órganos sociales, disolución, sociedades cerradas

Abstract

This paper aims to focus on the basic rationale of the legal ground for dissolution of corporations due to corporate deadlock (current Article 363.1 d Spanish Companies Act 2010). For this purpose this work examines critically the evolution followed by the Spanish legislature and case law in the recognition and enforcement of this regulation. The objective of this brief research is to evaluate the treatment that the Spanish Corporate Law provides in case of corporate deadlock, especially in relation with closely-held corporations.

Keywords: Corporate Law, Limited Liability Company, Corporate Deadlock, Dissolution, Winding Up, Closely-held Corporations

1. Introducción

La paralización o bloqueo de los órganos sociales es una de las causas legales de disolución de las sociedades de capital, recogida en el actual art. 363.1 d) del Capítulo I del Título X del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). Esta causa de disolución no ha sido suficientemente tratada ni por la doctrina mercantilista ni por la jurisprudencia¹. Sin embargo, las implicaciones en torno a ella adquieren vital interés, sobre todo en lo referido a las sociedades cerradas de carácter bipersonal, con una estructura de capital extremadamente concentrada, como pueden ser las sociedades conjuntas o familiares, propensas por su funcionamiento orgánico a padecer conflictos intra-corporativos de difícil solución cuando sus socios no han previsto por vía estatutaria o parasocial el modo de resolverlos.

Esta causa de disolución tiene su supuesto más común en las sociedades de responsabilidad limitada, con una estructura típicamente cerrada, como son las sociedades igualitarias o paritarias, constituidas por dos socios al 50%, o también por grupos de socios con participaciones fragmentadas que permiten a uno o a varios ejercer una facultad de bloqueo a través de los órganos sociales.

2. Antecedentes

El derecho de sociedades español ha seguido una trayectoria paralela a la del derecho italiano en cuanto a la regulación de la paralización de los órganos sociales como causa de disolución de las sociedades mercantiles. El Código de Comercio italiano de 1882 no la recogía como causa de disolución, de modo que hasta que se incluyó dicha causa expresamente en el Codice Civile de 1942 (art. 2448.3º), la doctrina y la jurisprudencia encuadraban el supuesto por subsunción en el 189.2 del Código de Comercio de 1882, exigiendo que la paralización fuese “absoluta”, es decir, que no se tratase de una mera dificultad transitoria². Esta exigencia implica que las desavenencias

¹ En la doctrina mercantilista española existe únicamente una monografía dedicada al tratamiento exhaustivo de esta causa de disolución. Se trata de la escrita por SENÉN DE LA FUENTE en 1965, titulada *La disolución de la sociedad anónima por paralización de los órganos sociales*.

² Codice Civile Italiano: R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942)
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/codciv.htm

han de ser insuperables, entendiendo por tales las relativas a acuerdos que deben ser necesariamente adoptados para la continuación de la vida social³.

En España, la STS de 14 de febrero de 1945 fue uno de los primeros pronunciamientos judiciales que abordó las situaciones de bloqueo en las sociedades capitalistas. Dicha resolución exigió que la imposibilidad de alcanzar el fin social tuviese carácter definitivo, no siendo suficiente una paralización de la vida social⁴. A tal efecto deja sentado que “la mera paralización de la vida social o la privación temporal de la empresa que constituía su objeto no eran, por sí solas, determinantes de la paralización (...) y que no debe reputarse causa de disolución la existencia de meras dificultades u obstáculos transitorios y vencibles en la realización del fin social. Ha de tratarse de una imposibilidad manifiesta. Es decir, de una falta de posibilidad clara y definitiva, o de una situación de la que sea sumamente difícil salir y que la sociedad no pueda aguantar sin grave quebranto”⁵.

³ Cfr. FRADEJAS RUEDA, “Paralización de los órganos sociales: supuestos de hecho y consecuencias. Una revisión.”, *Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil* (Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid), Ponencia del IX Seminario Harvard-Complutense, 2012, págs.4 y 5, quién recoge la principal doctrina italiana sobre este punto, doctrina societaria precursora de la española: BRUNETTI, *Trattato del Diritto delle società (vol. II), Società per azioni*, Milán, 1948, pág. 554; FERRARA/COSTI, *Gli imprenditori e le società*, Milán, 1987, pág. 592; FRÉ, “Società per azioni”, en SCIALOJA/BRANCA, *Comentario del Codice Civile*, Bolonia-Roma, 1982, págs. 849-850; GALGANO, F., “Le società per azioni”, en GALGANO (dir.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Tomo VII, Padua, 1988, pág. 412; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Turín, 1959, pág. 381; MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Milán, 1974, págs. 111-112; NICCOLINI, “Scioglimento, liquidazione ed estinzione di società di capitale”, *Giur. Comm.*, 1991, Tomo I, pág. 772 y sigs., y PORZIO, *L'estinzione delle società per azioni*, Nápoles, 1959, págs. 67-68. En cambio, en el derecho francés, el art. 1844.7.5º del Code, es un precepto situado entre las normas comunes a todas las sociedades y recoge como causa de disolución, si bien con una limitación innecesaria de supuestos: “las desavenencias entre los socios que paralicen el funcionamiento de la sociedad”. Esta causa de disolución no ha sido apenas verificada en relación con las sociedades anónimas y ha sido objeto de una nula atención por la doctrina francesa, mientras que la jurisprudencia se ha limitado a decir que dicha causa sólo puede ser tomada en consideración si compromete el funcionamiento de la sociedad (vid. RIPERT/ROBLOT, *Traité de droit commercial*, vol. I, París, 1989, pág. 1129). Por su parte, en derecho alemán, la doctrina se limita a señalar, en el marco del análisis del art. 61 GmbH (“disolución judicial por imposibilidad de conseguir el fin social o existencia de causa importante que afecte al funcionamiento de la sociedad”), que las desavenencias entre los socios, al impedir la formación de la voluntad social, inciden sobre la sociedad en su funcionamiento.

⁴ La cuestión de la paralización social no fue tratado jurisprudencialmente hasta 1945. SENÉN, *La disolución...*, cit., pág. 185, confirma que “en la doctrina mercantil española anterior a la Ley de 17 de julio de 1951 ningún autor se enfrentó, pues, de un modo directo, con la paralización de los órganos sociales como posible causa de disolución de la sociedad anónima, aunque LANGLE rozase el problema, pero con un criterio por completo equivocado a nuestro juicio”.

⁵ La STS de 14 de febrero de 1945 exige que la imposibilidad de alcanzar el fin social tenga carácter definitivo y que no debe reputarse causa de disolución la existencia de meras dificultades u obstáculos transitorios y vencibles en la realización del fin social. Esta misma sentencia reconoce que la LSA de 17 de julio de 1951 venía a admitir que la decisión judicial podía sustituir a la deliberación y al acuerdo de la junta general cuando la paralización de los órganos sociales comportara la imposibilidad de alcanzar el fin

En la doctrina mercantil española anterior a Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 ningún autor se enfrentó de un modo directo con la paralización de los órganos sociales como posible causa de disolución de la sociedad anónima⁶. De forma tácita e indirecta sería reconocida como causa de disolución a través de la causa disolutoria por imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social (vía art. 150.2 de la LSA de 1951⁷)⁸.

Esta situación se prolongaría hasta la reforma de la LSA de 1989 con la introducción de una nueva regulación de la eficacia de esta causa de disolución (260.1 3º LSA⁹), aunque no fuera propiamente una novedad en el derecho positivo español habida cuenta de que ya venía recogida en términos bastante parecidos en los arts. 30 de

social. Esta sentencia se ha visto ratificada por la STS de 3 de junio de 1967 (RJ 1967, 2939) y STS de 5 de junio de 1978 (RJ 1978, 2220).

⁶ La STS de 15 de febrero de 1982 (RJ 1982, 685) es una resolución que aborda la problemática de la paralización social en el marco de una sociedad limitada familiar. En ella se recoge el fundamento de derecho de la STS de 3 de julio de 1967 (R. 2939): “Que esta Sala en su sentencia de 3 de julio de 1967 contempló el supuesto que se calificó de sugestivo, de si en una sociedad de responsabilidad limitada integrada sólo por dos socios, con igual participación e idénticas facultades de administración, al surgir desacuerdos entre los mismos podía acordarse su disolución impetrada por uno de los socios con la oposición del otro, llegando a la conclusión afirmativa y ello por cuanto, ante tan encontradas posturas, no podía adoptarse ninguna decisión que permitiera el desarrollo del fin social, situación idéntica a la que en el presente caso es objeto de enjuiciamiento, estableciéndose en el párrafo 2º del art. 30 de la Ley reguladora del Régimen jurídico de las Sociedades de Responsabilidad limitada, al contener la misma “una fórmula genérica para todos aquellos supuestos que verdaderamente sean de reglas de criterio humano, produzcan el colapso de la vida de la compañía, imposibilitando su normal funcionamiento de manera permanente y definitiva”. *Vid.* APARICIO GONZÁLEZ/DE MARTÍN MÚÑOZ, *La sociedad anónima. Legislación, jurisprudencia y bibliografía*, Madrid, 1999, pág. 914.

⁷ Por tanto, hasta 1989, con la entrada en vigor de la LSA que derogaba la Ley de 17 de julio de 1951, no apareció como tal de forma expresa la paralización de órganos sociales como causa de disolución. Véase, entre otras, la STS de 2 de marzo de 1998 (RJ 1998, 1126) que, aplicando la LSA de 1951, sostuvo que el art. 150 de esta ley incluía tácitamente el bloqueo societario como supuesto de la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, derivada de la existencia de una casi total paralización de la actuación de los órganos de la sociedad.

⁸ A este respecto SENÉN, *La disolución...*, cit., pág. 187, recoge lo comentado sobre la interpretación del art 150.2 LSA de 17 de julio de 1951: “Incluso debe reputarse supuesto de imposibilidad de realizar el fin social, el hecho de que el funcionamiento de la sociedad se haga imposible por meras disensiones o diferencias entre los socios. En la práctica, se da con frecuencia ese supuesto en las sociedades que teniendo un número reducido de accionistas se halla repartido el capital social en forma que no permita reunir en las Juntas Generales o en los Consejos de Administración las mayorías necesarias para constituirse o para tomar acuerdos. Cuando por unas u otras razones se produce la inactividad de los órganos sociales, la sociedad así paralizada no podrá realizar el fin para el que se constituyó y deberá abrirse el camino de la disolución”.

⁹ Art. 260.1 3º LSA 1989: “Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento”.

la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 1984¹⁰ y 103.4º de la Ley General de Cooperativas de 1987¹¹. El Anteproyecto del Ministerio de Justicia de 19 de enero de 1988, que introdujo por primera vez la modificación del art. 150.2 de la Ley de 17 de julio de 1951, se refería a la causa de disolución por paralización de los órganos sociales, por ser “tan frecuente cuando en la sociedad existen dos grupos enfrentados de capital con el cincuenta por ciento cada uno de ellos”.

La misma causa de disolución se reproduciría en la LSRL de 1995 en idénticos términos (art. 104.1 c). Con ella se intentaría abordar de forma más precisa la problemática de los conflictos intra-corporativos en las sociedades pequeñas y familiares, que revestían forma societaria de tipo limitada, puesto que bajo la anterior Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953 (arts. 30.2 y 31) -como queda patente en la STS de 3 de julio de 1967 (R. 2939)-, se venía haciendo una aplicación analógica con base en el régimen de la disolución de las sociedades personalistas. Así sucedía cuando ante las posturas encontradas de los socios no podía adoptarse en junta general ninguna decisión que permitiera la realización del fin social. El colapso de la vida de la sociedad imposibilitaba su normal funcionamiento y al no poder formarse una mayoría estable, estas sociedades limitadas compuestas por dos socios, familias o grupos de socios paritarios debían reputarse como sociedades de tipo personalista, aplicándose subsidiariamente la vía del art. 218.7º C.Com, en conexión con lo establecido en la ley especial en su art. 31¹².

3. Estado de la cuestión

Actualmente, la paralización de los órganos sociales es una de las causas de disolución contempladas en el elenco de causas legales del art. 363 LSC. En la refundición operada en 2010 el legislador optó por incluir específicamente esta causa de

¹⁰ Este precepto enunciaba causas especiales con relación al régimen general de las sociedades aseguradoras, ya fueran anónimas o cooperativas. En su apartado 1º letra c) contemplaba como causa de disolución: “la inactividad de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento”.

¹¹ Este precepto contemplaba como causa de disolución de las sociedades cooperativas: “la paralización o inactividad de los órganos sociales durante dos años consecutivos”.

¹² Este criterio es recogido en la STS de 25 de octubre de 1963 (R. 4215) y reiterado en la STS de 18 de enero de 1962 (R. 448) y STS de 13 de febrero de 1962 (R. 696): “Cuando sean sólo dos los socios con idéntica participación de capital, al no haber mayoría posible, deben reputarse como sociedades de tipo familiar y de carácter personalista y se está en el caso de aplicar subsidiariamente el núm. 7º del art. 218 del C.Com, que admite la Ley especial en su art. 31”.

disolución en una letra separada diferenciándola así de las causas de disolución por la conclusión de la empresa que constituya su objeto y por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, que permanecían vinculadas en las leyes refundidas (LSA y LSRL)¹³.

La LSC confirma la reiterada doctrina y jurisprudencia que llevaban contemplando esta causa disolutoria como autónoma o específica¹⁴, aunque en puridad no opere sino como un supuesto concreto o subtipo de la imposibilidad de conseguir el fin social, con la cual sigue conservando una comunidad de motivación¹⁵. Sin embargo, la sustantivación de la que ahora goza con la nueva redacción contrasta con la interpretación histórica u originaria, que exigía que la paralización de los órganos sociales fuese definitiva e insuperable, de acuerdo con los postulados de la causa de donde procede y escinde (“la imposibilidad de alcanzar el fin social”)¹⁶. La paralización se concebía como una manifestación de aquella imposibilidad¹⁷. Así, un empate sistemático derivado de una disputa entre los socios en junta general se reputaba como una causa originaria de la disolución, por lo que la técnica jurídica consistía en una operación de subsunción del supuesto de paralización de los órganos sociales en el

¹³ La Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles de 2002, elaborada por la Ponencia Especial de los Prof. Fernando SÁNCHEZ CALERO, Alberto BERCOVITZ y Ángel ROJO, de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, mantuvo igual el régimen jurídico de la disolución (Libro VI) y la causa de paralización en parecidos términos: “Por la conclusión de la actividad que constituya el objeto social, la imposibilidad manifiesta de realizarlo o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento” (art. 554.4º). Más recientemente, la Propuesta de Código Mercantil de 2013 mejoró sustancialmente el tenor literal de esta causa legal de disolución, al ceñir el bloqueo únicamente a la junta general, evitando el equívoco de entender que han de ser los dos órganos sociales los que estén bloqueados simultáneamente para que la causa y procedimiento disolutorio tenga eficacia. Así, el art. 272-8.1 d) de dicha Propuesta contemplaba como causa de disolución: “La paralización de la junta general, por imposibilidad manifiesta de adoptar acuerdos sociales”. Por tanto, la Propuesta avanzó tímidamente en la línea de lo que la jurisprudencia ya había afirmado, en el sentido de que basta que sea la junta el órgano que esté bloqueado de forma indefinida y manifiesta, puesto que si el conflicto se limitara al órgano administrativo, correspondería a la misma removerlo. Lamentablemente, el tenor de la Propuesta no se ha visto recogido después en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 2014, que regresa a los términos vigentes: “La paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento” (art. 272-8.1 d del Anteproyecto). No obstante, hay que reconocer el avance novedoso en cuanto al régimen de disolución judicial, con el inciso que se hace en el segundo párrafo del art. 272-10.1: “En el caso de paralización de la junta de socios, la disolución judicial podrá solicitarse directamente por cualquier interesado”.

¹⁴ Vid. BATALLER, “La disolución de las sociedades de capital”, en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, Tomo II, Madrid, 2011, pág. 2552.

¹⁵ Vid. BELTRÁN, *La disolución de la sociedad anónima*, Madrid, 1991, pág. 103; GARRIGUES, *Dictámenes III*, Madrid, 1976, págs. 743-744; SENÉN, *La disolución...*, cit., págs. 159-161 y DE EIZAGUIRRE, *La disolución de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 2000, pág. 52.

¹⁶ Cfr. URÍA, *Derecho Mercantil*, 28ª ed., Madrid, 2002, pág. 419.

¹⁷ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La sociedad de responsabilidad limitada*, 2ª ed., Madrid, 2006, pág. 419, confirma que en algunos casos este supuesto se ha tratado como una variante del supuesto general consistente en la imposibilidad de conseguir el fin social.

precepto de la imposibilidad de realizar el fin social, con igual planteamiento que el Código italiano de 1882¹⁸.

En este sentido destaca la STS de 5 de junio de 1978 (RJ 1978,2220), resolución judicial que reconduce la paralización de los órganos sociales a la imposibilidad de realizar el fin social: “la sociedad anónima se disolverá por la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social; y esto se produce, precisamente cuando la junta general como el consejo de administración se ven impedidos de funcionar, es decir, se ven afectados por una paralización absoluta que le impide adoptar acuerdos, ya que la actividad empresarial exige la exteriorización de la voluntad social para poder cumplir tanto su fin, como diferentes objetos; ello se infiere, además, de las normas que regulan el modo de operar de la Junta general y del Consejo de administración, y especialmente del principio de sumisión al voto de la mayoría como procedimiento para formar la voluntad social, y de los requisitos que se exigen para que aquellos órganos se entiendan válidamente constituidos (...) Que, aunque no existiera este precepto, siempre subsistiría la necesidad de reputar ese empate entre los accionistas, como una de las causas que originan “la imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social -que a su vez es causa de la disolución de la sociedad-, ya que por aquel empate de votos no se podrá alcanzar un acuerdo social de disolución, impugnabile por la vía procesal del art. 67 y tendrá que ser decretada aquélla por resolución judicial”.

En consecuencia, puede reconocerse una evolución en nuestro ordenamiento positivo desde una aplicación tácita e indirecta de la paralización social por medio de la subsunción en la causa disolutoria por imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social (LSA 1951) hacia la previsión legal expresa (LSA 1989, LRSL 1995 y LSC 2010)¹⁹. De

¹⁸ Cabe recordar que el Código de Comercio de 1885, en su art. 221.1, se limitaba a decir que las compañías de cualquier clase se disolverán totalmente: “1. Por el cumplimiento del término prefijado en el contrato social, o la conclusión de la empresa que constituya su objeto (...)”. Lo que quiere decir que literalmente el Código de Comercio no ampliaba esta causa de disolución al supuesto de imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social. Fue precisamente con la publicación de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, en su art. 150.2, cuando por primera vez se consideraba de modo expreso como causa de disolución para este tipo de sociedades, no sólo la conclusión de la empresa que constituya su objeto, sino también “la imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social”

¹⁹ En opinión de PAZ-ARES, C., “Disolución de la sociedad de responsabilidad limitada por paralización de órganos sociales”, *Anuario de Derecho Civil*, XXXV, 1983, págs. 1073-1074, esta subsunción, bajo la rúbrica de “parálisis de los órganos sociales” dentro de los preceptos referidos de la LRSL (30.2) y LSA 1951 (150.2), fue efectuada de forma técnicamente impecable. En esta misma línea según se refiere dicho autor, la subsunción ha sido avalada por otros autores como SENÉN, GIRÓN, URÍA, GARRIGUES y DE LA CÁMARA.

tal forma que en la actualidad el fundamento de la causa de disolución descansa exclusivamente en la norma positiva, lo cual facilita su invocación por los interesados. En sentido contrario, es evidente que antes de aparecer entre las causas de disolución de la LSA, las dificultades para aplicarla eran mucho mayores por la imposibilidad de fundamentarlo directamente en un precepto específico. La LSC, por tanto, unifica el régimen de disolución para las sociedades de capital, estableciendo unas causas de disolución comunes tanto para las sociedades anónimas como para las sociedades de responsabilidad limitada.

4. Alcance de esta concreta causa disolutoria

Para observar el alcance de esta causa recogida en el art. 363.1 d) LSC hay que proceder a examinar con detalle la doctrina y jurisprudencia, ya que limitándonos al tenor literal del precepto vigente será muy difícil captar nítidamente en qué supuestos puede hablarse de paralización social y qué requisitos han de darse para que concurra como causa de disolución. De hecho, como antes se ha señalado, cuando la paralización social no estaba prevista de un modo expreso en la ley, el fundamento había que encontrarlo incluido en el supuesto de imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social, que sí era el que estaba previsto desde la LSA de 1951.

En efecto, la sociedad afectada se verá impedida de alcanzar el fin social cuando sus órganos sociales sufran una paralización absoluta e insalvable, es decir, cuando la junta general y el órgano de administración no puedan funcionar normalmente hasta el punto de no poder desarrollar el objeto para el que se constituyó. Por consiguiente, esto se materializará en la imposibilidad de realizar el fin social, que es el cumplimiento del principio de ánimo de lucro que informa toda actividad mercantil y que en derecho societario se consagra en el axioma de la distribución periódica de dividendos. Ello sucederá si la junta general, al haber incurrido en situación de bloqueo, no aprueba las cuentas anuales del ejercicio anterior y, como consecuencia, se produce el cierre registral de la compañía mercantil.

Igualmente, la sociedad de capital tampoco podrá funcionar normalmente ni realizar el objeto social si debido a la paralización de la junta no pueden utilizarse los distintos procedimientos que la ley ofrece para captar recursos, como pudieran ser las

ampliaciones de capital, la emisión de obligaciones o la modificación estatutaria de carácter necesario para la adaptación de la sociedad a la evolución del tráfico mercantil. La imposibilidad para alcanzar el fin social todavía será más evidente si además se encuentra paralizado el órgano de administración, ya que al verse la sociedad privada de representación no podrá entrar en relación con terceros ni realizar actuación alguna en el mercado²⁰.

En síntesis, partiendo de la autonomía con la que aparece en la nueva redacción legal, la realidad es que ambas causas de disolución se complementan, reputando comprendidas en ambos preceptos -arts. 363.1 c) y 363.1 d) LSC- todos aquellos casos en que por razones externas o internas fuere imposible el funcionamiento de la sociedad y la realización del fin social. El alcance operativo de las respectivas causas disolutorias se caracterizará por el despliegue de una doble vía: para los hechos de índole externa, como pudieran ser un obstáculo natural o un impedimento técnico, operaría la causa disolutoria por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social²¹; para las circunstancias internas operaría la causa disolutoria por paralización social, en tanto quede acreditado en sede judicial que el funcionamiento normal de la sociedad resulta imposible con motivo de graves disensiones entre los socios que paralicen definitivamente la actividad de los órganos sociales²².

²⁰ Para ilustrarlo, basta traer a colación los ejemplos dados por URÍA y recogidos por SENÉN, *La disolución...*, cit., págs. 160-161. Así sucedería en el caso de una sociedad anónima de obras públicas en la que tanto la junta general como el consejo de administración dejasen de funcionar. Es evidente que por un lado, al no poder acudir a los concursos y subastas del Estado ni firmar contrato alguno con terceros para la ejecución de obras, la sociedad no podría realizar las actividades propias de su objeto social. Y si a esto se añade la imposibilidad de financiar sus trabajos, al verse impedida para acordar aumentos de capital, emisión de obligaciones etc., por la paralización de la junta general, será forzoso llegar a la conclusión de que tal sociedad se ve impedida para conseguir el fin para el que se constituyó y debe ser disuelta.

²¹ Como señala, MUÑOZ MARTÍN, N., “La disolución”, *Revista de Derecho de Sociedades*, N° Extraordinario, 1994, pág. 553 y sigs., son muchas las causas que pueden impedir la consecución del fin social y de carácter también diverso: obstáculos naturales, técnicos o humanos: falta de materias primas, falta de mano de obra, revocación de concesiones necesaria para la realización de la actividad que se constituye como actividad social etc. Sin embargo, sea cual sea el obstáculo, éste ha de ser manifiesto, ha de presentarse como causa ineludible e insubsanable y por ello de carácter permanente. Este carácter permanente de los supuestos que dan lugar a esta causa de disolución y su incidencia sobre la actividad social, convirtiéndose en supuestos de imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto social, hará que la sociedad, tras la constatación del hecho, sólo pueda evitar su disolución a través de un acuerdo de cambio del objeto social, que deberá adoptarse con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos sociales.

²² Vid. FLAQUER, “La paralización de la Junta general de accionistas (reflexiones en torno a la STS de 12 de noviembre de 1987)”, *Revista General del Derecho*, 1989, pág. 1885 y URÍA, *Derecho Mercantil*, cit., pág. 419.

La objeción se plantea acerca de lo que se considera por paralización “definitiva”, es decir, si la invocación del procedimiento disolutorio debe esperar a la completa paralización de los órganos sociales con carácter insuperable o basta una mera constatación de la existencia del conflicto intra-corporativo. Atendida la tradición jurisprudencial al respecto, se ha venido interpretando que para la eficacia de esta causa de disolución se requiere necesariamente que se produzca una paralización manifiesta y que tenga un carácter definitivo e insalvable, en el sentido de que haya una situación de la que sea sumamente difícil salir y que la sociedad no pueda funcionar sin grave quebranto²³.

Como se ha afirmado, esta interpretación estaba en relación con el origen mismo de esta causa de disolución, en tanto que prolongación o variante tácita de la imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social, de donde resulta que existe imposibilidad de funcionamiento de la sociedad siempre que se acredite la incapacidad por parte de la junta de alcanzar una decisión que legalmente fuera necesario tomar, como una reforma estatutaria, un aumento o reducción del capital, o el cambio de objeto social²⁴. Sin embargo, la nueva autonomía de la causa disolutoria parece matizar su eficacia restrictiva considerando como requisito suficiente que el conflicto intra-corporativo genere una inmediata puesta en peligro de la economía de la sociedad o incluso una disfunción temporal considerable no necesariamente reiterada ni absoluta.

Esto no significa que haya que entender que la autonomía de la que goza esta causa legal de disolución autorice a superar sin más una interpretación histórica de marcado signo institucionalista, a pesar de la tendencia jurisprudencial favorable a la disolución en caso de sociedades de dos únicos socios o grupos de éstos con igualdad de participaciones²⁵. Esta interpretación tiene uno de sus fundamentos en el principio de supervivencia o conservación de la empresa, de ahí que la paralización sea adjetivada por los jueces como definitiva, insuperable, permanente o reiterada, como criterio de

²³ Entre otros, GARRIGUES, *Dictámenes* III, cit., págs. 589-596, 743-744, 908-910; FLAQUER, “La paralización...”, cit., pág. 1887 y con anterioridad y mayor exhaustividad SENÉN, *La disolución...*, cit., págs. 159-161. La jurisprudencia menor también acoge mayoritariamente esta doctrina: Auto del Juzgado 1º de lo Mercantil de Cádiz de 23 de abril de 2007 (RJ 2007, 136408) y la DGRN en su Resolución de 24 de marzo de 2007 (RJ 2007, 1794).

²⁴ Cfr. BLANQUER, *Disolución, liquidación y reactivación de las sociedades anónimas y limitadas*, Valencia, 2001, pág. 35.

²⁵ Vid. STS de 18 de enero de 1962 (R. 448), STS de 25 de octubre de 1963 (R.4215), STS de 3 de julio de 1967 (R. 2939) y STS de 5 de junio de 1978 (RJ 1978,2220).

exigencia para la admisión de la demanda de disolución²⁶. No obstante, que la sociedad siga funcionando o que incluso mejore sus resultados económicos temporalmente no es óbice para denegar la concurrencia de causa de disolución judicial si existe y se prueba una paralización de sus órganos sociales²⁷.

Es por ello que no hay que confundir la imposibilidad de desarrollar el objeto social con la imposibilidad de realizar el fin social, que es la consecución por los socios de un beneficio repartible, en tanto que fundamento del principio de ánimo de lucro que informa a toda la actividad mercantil. La razón se funda en que el fin social exige la adopción de acuerdos más allá de la gestión ordinaria, tales como aumentos o reducciones de capital, reparto de dividendos o aprobación de las cuentas anuales. No basta, pues, que la sociedad se limite a cumplir con la actividad empresarial que constituya su objeto social. El fin social no podrá alcanzarse debidamente si los órganos sociales se encuentran paralizados por un tiempo prolongado, aunque la sociedad siga temporalmente desarrollando su objeto social²⁸.

²⁶ Cfr. BATALLER, “La disolución...”, cit., pág. 2552. En torno al principio de conservación de la empresa que informa todo la regulación mercantil tenemos uno de los trabajos de referencia de nuestra doctrina en RUBIO, J., “El principio de conservación de la empresa y la disolución de sociedades mercantiles en Derecho español”, *Revista de Derecho Patrimonial*, 1935, pág. 288 y sigs. A nuestro juicio, este principio de conservación de la empresa encontraría hoy su actualización teórica por medio de su encuadre en la tesis institucionalista de la responsabilidad social corporativa, en aras de la defensa de los *stakeholders* (principalmente acreedores, trabajadores y Hacienda Pública). Por ello, ante una situación de bloqueo, el vigente régimen disolutorio y en particular la causa de disolución del art. 363.1 d) LSC no parece que sea una vía satisfactoria en atención al conjunto de intereses implicados.

²⁷ A este respecto la SAP de La Coruña de 26 de mayo de 2003 (JUR 2003, 237363), sentencia no exenta de crítica, que se aparta de esa doctrina, tratando de favorecer el funcionamiento de la empresa.

²⁸ Por tanto, si consideramos que el fin social es la obtención de beneficios a través del ejercicio de una actividad económica, la imposibilidad de conseguirlo puede nacer tanto de la imposibilidad de obtener beneficios (fin último) con el ejercicio del objeto social, cuanto de la imposibilidad de desarrollar el objeto social (fin medio). A mi juicio, esta interpretación es la que debe primar, puesto que una sociedad paralizada, al no poder desarrollar el objeto social, a la larga no podrá realizar el fin social. Sobre la distinción entre fin social y objeto social véase GIRÓN, *Derecho de Sociedades I, Teoría general. Sociedades colectivas y comanditarias*, Madrid, 1976, págs. 203-204 y RUBIO, J., *Curso de derecho de sociedades anónimas*, 3ª ed., Madrid, 1974, págs. 489-492. A este respecto, es ilustrativo la posición que se adopta en derecho estadounidense. En algunos de sus ordenamientos estatales la situación económica de la propia sociedad será un factor determinante para la aplicación o no de la causa disolutoria a las sociedades cerradas, en la idea de que la disensión intra-corporativa perjudica (o puede perjudicar) a los socios. A este respecto, la Section 1104 (a) (3) de la vigente *Business Corporation Law* de Nueva York, autoriza la disolución judicial cuando "there is a internal dissension and two or more factions of shareholders are so divided that dissolution would be beneficial to the shareholders". Por tanto, para acogerse a esta causa de disolución, el socio que la promueva tendrá que alegar que aparte del disenso interno, la disolución sería beneficiosa para los socios. Vid. MAHLER, P., “Shareholder Wars: internal disputes in close corporations do not always lead to judicial dissolution”, *Nueva York State Bar Association Journal*, vol. 76, Nº 8, 2004, pág. 29. Así, si la sociedad 50/50, a pesar de las desavenencias existentes entre sus socios, tiene unas cuentas saneadas y genera beneficios, los jueces podrían rechazar la solicitud de demanda judicial porque entienden que la voluntad de terminar con el vínculo societario se sustenta en la mera voluntad y no se justifica atendiendo a la situación patrimonial de la sociedad. En este

A la cuestión doctrinal de fondo se suma la que gira en torno a la dimensión y significado de la *affectio societatis* en el contrato de sociedad. Por una parte, algunos autores consideran dicho principio como un elemento esencial del contrato de sociedad, aún en las sociedades capitalistas²⁹. Esta opinión parece haber sido superada por aquellos que entienden que la *affectio societatis* ha de quedar relegada en lo que respecta a las sociedades anónimas, y más concretamente, en lo referido a las sociedades cotizadas. En esta tipología social, dada su magnitud y el carácter fungible de los socios, los elementos subjetivos y personalistas tienden a desaparecer y el

sentido los casos *In re Cantelmo* (1949), *In re Bankhalter* (1953), *In re Radom&Neidorff* (1953), *In re Seamerlin Operating Co* (1954), *In re Dubonnet Scarfs, Inc* (1985), *In re Kaufman* (1996), *In re Glamorise Foundations, Inc* (1996) e *In re Parveen* (1999). En todos ellos, los jueces se decantan por la viabilidad de la sociedad y no por la disolución del vínculo societario sobre la base de la mala fe del socio que quiere disolver abusivamente una sociedad rentable, lo que a su vez pondría de relieve que no está realmente paralizada porque genera beneficios, realizando su objeto social con éxito en el mercado. La razón por la que el socio demandaría la disolución sería para obtener en la liquidación activos líquidos a fin de satisfacer a sus acreedores personales. La disolución, por tanto, no sería beneficiosa y no se podría acoger a la causa estipulada, por ejemplo, en la Section 1104 (a) (3) de la *Business Corporation Law* de Nueva York. Por otro lado, en el Estado de California se permite la disolución judicial/involuntaria de una *close corporation* cuando sea necesario proteger los intereses de los accionistas que reclaman. Sin embargo, la mera desavenencia existente entre los administradores no es causa para invocarla. A este respecto, el caso *Stuparich vs. Harbor Furniture Mfg. Inc.* (California Ct. App, 2000), en el que los demandantes interpusieron demanda solicitando la disolución involuntaria de una *corporation* familiar al surgir conflictos y discrepancias entre los administradores. El tribunal sostuvo que la solicitud de disolución debía reservarse para circunstancias que realmente la mereciesen, no siendo éste el caso, a pesar de la confrontación entre algunos miembros del consejo de administración. Mientras la empresa siguiese progresando económicamente tras las pérdidas de la década anterior, el remedio al conflicto no debía ser la disolución. Se ratificó la sentencia dictada en favor de la sociedad demandada. Sin embargo, sería procedente la disolución si se prueba que, además de la mala relación entre los socios, la contabilidad de la sociedad refleja un estado patrimonial negativo. Las demandas de disolución son admitidas por los tribunales estadounidenses porque la disensión personal entre los socios tiene más peso que la conservación del negocio común. Véase el caso *In re Pivot Punch & Die Corp* (1959), en el que el Juez Ponente autoriza la disolución al igualar una sociedad cerrada con una sociedad de personas, que puede disolverse por voluntad de cualquiera de sus socios. En este caso, la sociedad en cuestión, según razona el juez "is simply a partnership consisting of the petitioner and respondent, clothed with the benefits peculiar to a corporation, limited liability perpetuity and the like". Por tanto, cuando cesan las características personalistas (fidelidad, lealtad, confianza), las sociedades de capital cerradas y paritarias también deben cesar, porque dejan de ser beneficiosas para sus socios, incapaces de reconciliarse y de ejercer una administración coordinada y eficiente. En la misma línea, los casos *In re Surchin* (1967), *In re Gordon & Weiss, Inc* (1969), *In re T.J. Roman Paint Corp* (1984) y *Goodman & Lovett* (1994).

²⁹ Cuestión que se plantea DÍEZ-PICAZO, *Sistema de Derecho Civil*, Vol. 2, 11ª ed., Madrid, 2003, pág. 461: "Aunque la noción de la *affectio societatis* tenga todavía algún arraigo en la doctrina y en la jurisprudencia, son hoy muchos los autores que impugnan la existencia de ese pretendido elemento característico del contrato y muchos también los que lo mantienen aunque con escasa fe o lo rechazan implícitamente al pasarlo al silencio. Y es que añade CASTÁN, tanto si se sigue un criterio subjetivo para definir la *affectio societatis* (considerándola como intención de asociarse o de someterse al contrato de sociedad), como si se prefiere un criterio objetivo (viendo en ella un elemento económico de cooperación activa), siempre resulta que la *affectio societatis* viene a refundirse en los otros requisitos del contrato de sociedad". Finalmente DÍEZ-PICAZO toma posición afirmando que la *affectio societatis* "no parece ser otra cosa que el genérico consentimiento contractual, unido al fin que las partes persiguen. Pero ese fin se valora en todos los contratos para interpretar sus pactos y sus estipulaciones y para someterlos a una determinada calificación, no es específico de la sociedad".

elemento interpersonal generalmente no se tiene en consideración al constituir las, invertir o participar en ellas³⁰.

Esto no es así respecto de las sociedades limitadas (y anónimas estatutariamente cerradas), en las cuales aún se pueden reconocer ciertos rasgos personalistas y es factible advertir que el *intuitu personae* puede desempeñar un papel importante³¹. En este sentido, bastaría la ausencia de *affectio societatis* –materializada en constantes desavenencias intra-corporativas (fehacientemente acreditadas)- para operar como fundamento favorable en orden a la solicitud de disolución por parte del socio interesado³².

La importancia de la *affectio* es de carácter instrumental y radica en su valor para hacer patente y complementar la argumentación de parte cuando la junta general no ha logrado constituirse válidamente, por el continuado absentismo de un socio paritario que impide alcanzar los quórum mínimos exigidos para la adopción de determinados acuerdos o, aún constituyéndose, cuando en las votaciones se ponga de manifiesto un desacuerdo total entre los socios, incapaces de formar una mayoría estable en junta para decidir sobre alguno de los asuntos del orden del día que sean relevantes para la buena marcha de la vida de la persona jurídica. El acaecimiento de un bloqueo pondrá de relieve que los socios no tienen ya ese deseo de permanecer en sociedad, motivo

³⁰ Para SENÉN, *La disolución...*, cit., pág. 164, esta opinión se basa en razones no siempre válidas: “en efecto, cuando la doctrina resta valor a la *affectio societatis*, desde el punto de vista de la disolución de la sociedad anónima, se basa, por lo general, en el carácter fungible de la cualidad de socio de una sociedad anónima y en la posibilidad ilimitada de transmitir las acciones a terceras personas como medio de abandonar una compañía en la que ya no se desea permanecer”. Para ello esgrime el argumento de la facilidad de transmitir ilimitadamente las acciones de una sociedad anónima, que “sólo existe cuando se trata de una gran sociedad anónima con miles de accionistas y con sus acciones admitidas a la contratación y a la cotización oficial en las Bolsas Oficiales de Comercio, ya que en estos casos sí puede decirse que los títulos de la sociedad tienen un mercado permanentemente abierto y fluido. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de una sociedad anónima pequeña, con escaso número de socios (...) difícilmente encontrarán comprador para sus títulos”.

³¹ Y de igual modo que en la sociedad limitada, en la sociedad anónima de tipo cerrada. En este punto, señala CORTÉS DOMÍNGUEZ, en *Funciones de la Sociedad Anónima. Legislación y práctica española*, Zaragoza, 1985, pág. 58: “que al desenvolvimiento del *intuitu personae* ha contribuido, ante todo, la amplia sanción legislativa de las limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones que, como es sabido, pueden introducirse tanto en la constitución de la sociedad cuanto en un momento posterior, se trate de acciones nominativas o lo sean al portador”.

³² Conforme con FLAQUER, “La paralización...”, cit., pág. 1886, quién precisa: “este carácter limitado del derecho de separación, unido a la pérdida de la llamada *affectio societatis* en los casos de desavenencias entre los socios, pueden justificar la disolución de la compañía en aras a la evitación de situaciones de encarcelamiento de un socio en sociedades anónimas de tipo cerrado, que, por lo general, contienen restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y en las que no olvidemos que el *intuitu personae* juega un papel muy importante”.

determinante de la constitución de la sociedad o de la toma de participación en la misma. De esta forma, la paralización social debidamente acreditada por el correspondiente libro de actas (del consejo de administración –si lo hubiere- y de la junta general) servirá para esgrimir la pérdida de la *affectio societatis*, demostrando que los socios no pueden convivir entre ellos, o lo que es lo mismo, carecen de ese “espíritu de asociación” que hace posible la vida en sociedad.

Dicha situación conduce a que la única vía legal -dado el carácter limitado del derecho de separación y del régimen de transmisibilidad de las participaciones- lo constituya la disolución de la sociedad, aunque ni siquiera los socios se pongan de acuerdo para disolverla³³. Por tanto, en la fundamentación del socio paritario demandante que se sienta “prisionero” de una sociedad cerrada paralizada por el consocio ha de valorarse la pérdida de la *affectio societatis* a fin de obtener una estimación judicial favorable a la disolución.

El hecho de que la paralización social se consagre ya en letra separada como supuesto o causa específica (art. 363.1 d LSC) parece autorizar a flexibilizar una interpretación de signo institucionalista que estaba ligada a su origen. Una interpretación más laxa consideraría suficiente que el conflicto intra-corporativo generase una inmediata puesta en peligro de la economía social o incluso una disfunción temporalmente considerable aunque no necesariamente reiterada³⁴. Este argumento alternativo descansa en el principio de rendimiento y consiste en flexibilizar la fundamentación originaria y restrictiva para contemplar la concurrencia de la causa de disolución, sin atender a la ausencia actual de *intuitus* o *affectio* sino a la peligrosidad y potenciales daños económicos que se irroguen con raíz en el conflicto intra-corporativo³⁵.

³³ Cfr. SENÉN, *La disolución...*, cit., pág. 165.

³⁴ Por esta nueva interpretación aboga BATALLER, “La disolución...”, cit., pág. 2552: “Se supera así una interpretación histórica del precepto que asume los postulados propios de la causa de donde proviene –la imposibilidad de alcanzar el fin social-, para acoger una interpretación más acorde con los valores que deben preservarse”.

³⁵ A juicio de PAZ-ARES, “Disolución...”, cit., pág. 1076, la clave de la solución a este problema deberá encontrarse en el denominado principio de rendimiento, como *ratio* disolutoria, en vez de en el principio *intuitus* del contrato social. La solución que propone es una vía intermedia que ponga el acento en la relación de causalidad entre los conflictos intra-corporativos y lo que IMMENGA denomina una inmediata puesta en peligro de la economía de la sociedad, tal como está estipulado en los ordenamientos más avanzados como el alemán o el norteamericano, en el que la disolución se decreta cuando las desavenencias internas impiden a la sociedad operar ventajosamente.

5. Recapitulación

Como confirma la jurisprudencia, la paralización de los órganos sociales es un conflicto intra-corporativo que se produce principalmente en sociedades capitalistas cerradas paritarias y bipersonales, específicamente en aquellas que conservan rasgos personalistas, como las sociedades conjuntas y familiares, donde el *intuitus personae* puede apreciarse, por ejemplo, en la configuración estatutaria de prestaciones accesorias. La razón de que este tipo de sociedades sean propensas a este conflicto es que en ellas se quiebra el principio mayoritario, configurador de las sociedades de capital, a causa de la situación de igualdad original o sobrevenida, y a la facultad de bloqueo de un solo socio o grupo de socios.

El legislador español ha seguido una trayectoria paralela al derecho italiano, hasta contemplar este conflicto intra-corporativo como una causa legal de disolución, con un precepto específico. Ello facilita su invocación y fundamentación por parte de los interesados, dado que ya no se subsume en la causa disolutoria por imposibilidad de alcanzar el fin social, aunque ésta mantenga con la primera una comunidad de motivación. Como se ha observado *supra*, hay un nexo evidente entre la paralización social y la imposibilidad de alcanzar el fin social como causas de disolución vinculadas originalmente, puesto que una sociedad bloqueada no podrá realizar el fin social si su junta general no se constituye para adoptar una decisión que sea legalmente necesaria adoptar.

La cuestión más problemática es el carácter que ha de revestir la paralización de la sociedad en orden a fundamentar debidamente la incoación del procedimiento disolutorio. Si nos atenemos a la interpretación histórica ligada a la génesis normativa de esta causa legal de disolución, la paralización de los órganos sociales deberá ser definitiva y manifiesta, esto es, absoluta e insuperable para los socios. En este sentido, la *ratio legis*, de marcada impronta institucionalista, sería la de salvaguardar el principio de conservación de la empresa, que restringe la aplicabilidad de esta causa disolutoria.

Por contraste, la nueva substantivación de esta causa disolutoria abre una potencial flexibilización de su fundamentación, en la línea de la teoría contractualista, sobre la base del principio de rendimiento, bastando así para su alegación, no que se produzca una paralización absoluta, total y definitiva, sino una situación de bloqueo momentánea

que ponga en peligro potencial el patrimonio social. Esta fundamentación alternativa no tendría cabida, a nuestro juicio, en el vigente ordenamiento societario, porque aunque en virtud de la casuística pudiera ser ciertamente razonable no esperar a disolver judicialmente una sociedad hasta que no estuviera definitivamente paralizada, en la práctica podría tener unos efectos equivalentes a una separación *ad nutum*, que se reconoce, de momento y únicamente, a los socios de sociedades personalistas. Lo óptimo sería que de *lege ferenda* se reconociese el derecho de separación *ad nutum* como medida de desinversión en las sociedades limitadas, preferible a la vía de la disolución, por tratarse de un tipo híbrido donde conviven elementos personalistas y capitalistas.

Referencias bibliográficas

- APARICIO GONZÁLEZ/DE MARTÍN MÚÑOZ, *La sociedad anónima. Legislación, jurisprudencia y bibliografía*, Madrid, 1999.
- BATALLER GRAU, “La disolución de las sociedades de capital”, en ROJO/BELTRÁN (dirs.), *Comentario de la Ley de Sociedades de Capital*, Tomo II, Madrid, 2011.
- BELTRÁN, *La disolución de la sociedad anónima*, Madrid, 1991.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La sociedad de responsabilidad limitada*, 2ª ed., Madrid, 2006.
- BLANQUER, *Disolución, liquidación y reactivación de las sociedades anónimas y limitadas*, Valencia, 2001.
- BRUNETTI, *Trattato del Diritto delle società (vol. II), Società per azioni*, Milán, 1948, pág. 554.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, *Funciones de la Sociedad Anónima. Legislación y práctica española*, Zaragoza, 1985.
- DE EIZAGUIRRE BERMEJO, *La disolución de la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 2000.
- DÍEZ-PICAZO, *Sistema de Derecho Civil*, Vol. 2, 11ª ed., Madrid, 2003.
- FERRARA/COSTI, *Gli imprenditori e le società*, Milán, 1987, pág. 592.

FLAQUER RIUTORT, “La paralización de la Junta general de accionistas (reflexiones en torno a la STS de 12 de noviembre de 1987)”, *Revista General del Derecho*, 1989, pág. 1883 y sigs.

FRADEJAS RUEDA, “Paralización de los órganos sociales: supuestos de hecho y consecuencias. Una revisión.”, *Documentos de trabajo del Departamento de Derecho Mercantil* (Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid), 2012, Ponencia del IX Seminario Harvard-Complutense.

FRÉ, “Società per azioni”, en SCIALOJA/BRANCA, *Comentario del Codice Civile*, Bolonia-Roma, 1982, págs. 849-850.

GALGANO, F., “Le società per azioni”, en GALGANO (dir.), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Tomo VII, Padua, 1988, pág. 412.

GARRIGUES, *Dictámenes III*, Madrid, 1976.

GIRÓN, *Derecho de Sociedades I, Teoría general. Sociedades colectivas y comanditarias*, Madrid, 1976.

GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Turín, 1959, pág. 381.

MAHLER, P., “Shareholder Wars: internal disputes in close corporations do not always lead to judicial dissolution”, *Nueva York State Bar Association Journal*, vol. 76, Nº 8, 2004, pág. 28 y sigs.

MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Milán, 1974, págs. 111-112.

MUÑOZ MARTÍN, N., “La disolución”, *Revista de Derecho de Sociedades*, Nº Extraordinario, 1994, pág. 553 y sigs.

NICCOLINI, “Scioglimento, liquidazione ed estinzione di società di capitale”, *Giur. Comm.*, 1991, Tomo I, pág. 772 y sigs.

PAZ-ARES, C., “Disolución de la sociedad de responsabilidad limitada por paralización de órganos sociales”, *Anuario de Derecho Civil*, XXXV, 1983, págs. 1073-1076.

PORZIO, *L'estinzione delle società per azioni*, Nápoles, 1959, págs. 67-68.

RIPERT/ROBLOT, *Traité de droit commercial*, vol. I, París, 1989, pág. 1129.

RUBIO, J., “El principio de conservación de la empresa y la disolución de sociedades mercantiles en Derecho español”, *Revista de Derecho Patrimonial*, 1935, pág. 288 y sigs.

RUBIO, J., *Curso de derecho de sociedades anónimas*, 3ª ed., Madrid, 1974, págs. 489-492.

SENÉN DE LA FUENTE, *La disolución de la sociedad anónima por paralización de los órganos sociales*, Madrid, 1965.

URÍA, *Derecho Mercantil*, 28ª ed., Madrid, 2002.